

GOLPE BLANDO EN NICARAGUA: LA REBELIÓN PREFABRICADA

Moisés Elías Fuentes

El 18 de abril de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un proyecto enviado por el presidente Daniel Ortega para reformar el seguro social. En específico, la reforma aumentaba 0.75% la cuota entregada por los trabajadores para su jubilación, y la cuota correspondiente a los patrones en un 5%. Con estos cambios, el gobierno buscaba mantener la edad máxima de jubilación, que en Nicaragua es a los sesenta años, con 750 semanas de cotizaciones, a la vez que preservar la pensión mínima, creada para quienes no alcanzaron las semanas requeridas, pero sí la edad de retiro.

Sin embargo, el 19 de abril protestaron en las calles miles de personas contra la reforma, destacando los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) y los de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), quienes de inmediato se autodenominaron Movimiento 19 (M19);¹ los estudiantes pronto fueron acompañados por el alto empresariado del país, religiosos provenientes de la iglesia católica y de congregaciones protestantes y comunicadores contrarios al gobierno. En los días siguientes las movilizaciones continuaron y se verificaron actos de violencia, ante lo cual el presidente Ortega derogó la reforma; pero las protestas no cesaron y la violencia se recrudeció, con al menos 22 policías fallecidos en unos cuantos días, a más de opositores al gobierno y simpatizantes del mismo.

El gobierno convocó entonces a los sectores sociales inconformes a un diálogo e invitó a la jerarquía de la iglesia católica nacional como intermediaria. Los diálogos comenzaron el 16 de mayo y en ellos el cardenal Leopoldo Brenes expresó que el episcopado esperaba "...llegar a acuerdos importantes que se traduzcan en decisiones concretas." El presidente Ortega, a nombre del gobierno y de sí mismo, admitió los errores cometidos en la elaboración de la reforma y en su socialización. Además, desde el inicio del conflicto se ordenó al ejército y a la policía que permanecieran en sus cuarteles y centros operativos.

¹ Es clara la referencia a la guerrilla M-19, surgida en Colombia hacia 1974 y convertida en partido político en 1990. Varios de los militantes de la guerrilla provenían en efecto de las universidades y de la clase media alta. Sin embargo, desde sus inicios, el movimiento tuvo una sólida base de izquierda, que no han perdido los ex guerrilleros que sobrevivieron a la represión gubernamental que siguió a su desarme.

Pero, a diferencia de Ortega, la respuesta de los opositores se sintetizó en la expresión formulada por Lesther Alemán, estudiante de la UCA, cuando intervino en la mesa de diálogo: "Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado." A partir de esta aseveración, el discurso anti gobierno se radicalizó, aparecieron los tranques, es decir, barricadas utilizadas como centros de control de colonias, barrios y pueblos, mientras que la aversión a los trabajadores del gobierno y los simpatizantes del Frente Sandinista derivó en golpizas, violaciones tumultuarias, linchamientos y asesinatos.

Por otra parte, para mayo en los tranques y manifestaciones se evidenció la presencia de muchos individuos que no pertenecían al estudiantado y que realizaban incendios de escuelas, centros de salud, estaciones de policía, a más de la tortura y asesinato de simpatizantes del gobierno, reales o supuestos, hechos documentados sobre todo en fuentes electrónicas por tres clases de testigos: ciudadanos ajenos a la protesta que grabaron imágenes en sus celulares, periodistas de medios independientes, y grabaciones subidas a las redes sociales por los perpetradores de las agresiones a edificios públicos y a personas.²

Ahora bien, aunque al inicio de las protestas los partidos políticos opositores al gobernante Frente Sandinista no se presentaron, el 16 de mayo, al iniciar los diálogos, se formó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que, según se expresa en su página web, está conformada por "estudiantes, campesinos, académicos, religiosos y representantes de la Costa Caribe, Sociedad Civil y Empresa Privada", además de "actores nacionales e internacionales". Con todo, a despecho de esta pluralidad, es clara la participación activa de militantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), institutos políticos que han impuesto sus agendas a la Alianza.

En teoría, el conflicto se inició como respuesta a la reforma del seguro social y su menoscabo de la economía de los

² La periodista argentina Stella Calloni tiene varios escritos al respecto, que pueden consultarse en el archivo electrónico del Diario Contexto, de Argentina, y en Telesur Venezuela.

jubilados. Esto motivó la salida de estudiantes, procedentes de dos escuelas privadas administradas por religiosos y con una matrícula mayoritaria de jóvenes de clase media y media alta,³ mientras que los jubilados brillaron por su ausencia. A pesar de ello, durante el primer mes de conflicto se mantuvo la narrativa de protestas contra la reforma y en defensa de los jubilados. El argumento se sostuvo hasta que, en la mesa de diálogo, la Alianza Cívica exigió la renuncia de Daniel Ortega y su gabinete, así como elecciones adelantadas, demandas avaladas por la Organización de Estados Americanos y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y secundadas por la alta jerarquía de la iglesia católica, el Consejo Superior Empresarial (Cosep) y funcionarios de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG): el conflicto pasó del rechazo a una ley, a rechazo de la administración e incluso de la existencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Con el planteamiento de la renuncia y las elecciones anticipadas, la cobertura internacional aumentó de forma exponencial; Nicaragua, que apenas aparecía en algún noticiero o periódico, de golpe se volvió el centro de atención en Hispanoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Periódicos como *El Clarín* de Argentina, *El Mercurio* de Chile, *The Guardian* de Inglaterra y *El País* de España, dedicaron primeras planas a la crisis social nicaragüense, al tiempo que *CNN* de Estados Unidos, *DeutscheWelle* de Alemania o *France24* de Francia, analizaban la crisis en sus noticieros televisivos y de internet. Así, los medios internacionales juzgaron y dictaron sentencia: el rechazo a la reforma del seguro social derivó en la repulsión a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta, por lo que la crisis sólo se resolvería con la dimisión de Ortega, Murillo, el gabinete, la bancada sandinista en la asamblea y el juicio político y penal de todo el gobierno.

Esta versión es la que ha imperado en el grueso de los medios de comunicación (impresos y electrónicos) a nivel del continente americano, con réplicas igualmente tendenciosas en buena parte de los países europeos. Y no sólo en medios derechistas, sino también en varios medios progresistas o de izquierda, incluyendo algunos que en otros casos abordaron con objetividad crisis sociales, contrastando versiones y dando voz a todas las partes. Pero en este caso se decidió que Ortega y Murillo son infumables, impresentables, corruptos hasta la médula y capaces de cualquier acto brutal en su intención de conservar el poder. Los críticos de Ortega y su gobierno no se molestan en tomar en cuenta que Ortega y Murillo resultaron electos por amplia mayoría en elecciones que, aun con el boicot de varios partidos opositores que se



negaron a participar, tuvieron bajo abstencionismo y se realizaron con apego a la ley. Interesante, varios de los dirigentes opositores que apostaron por la no participación para desacreditar el proceso electoral, son los mismos que apostaron por el golpe blando, siguiendo los dictados del manual Sharp.⁴

Del 18 de abril al 18 de junio, se estimaban alrededor de 180 personas fallecidas en los disturbios, y en todos los casos se dio por sentado que murieron a manos de las fuerzas policiales, o de fuerzas paramilitares supuestamente organizadas por el gobierno para ejecutar represiones más elaboradas y brutales que las de la policía, finalmente una institución pública que debe evitar el desprestigio. La represión generalizada ha sido y aún es la nota de cada día en el grueso de los medios de comunicación, a pesar de que la violencia policial no pudo sustentarse con evidencia dura. Tampoco se sustentó la existencia de paramilitares, que por lo demás el Frente Sandinista no tuvo en su primera fase en el poder, del 19 de julio de 1979 al 25 de abril de 1990, ni tiene en esta segunda. Sin embargo, casi ningún medio se ha ocupado de cotejar la información, sobre todo si se tiene en cuenta que proviene de distintas fuentes, lo que exige mayor cuidado por parte de reporteros y periodistas de investigación, algo sospechoso al comparar la cobertura del conflicto en Nicaragua con el seguimiento de otras crisis, en las que se verifica toda información, por mínima que sea.

Revelador, los opositores hablaron de muertes de civiles, a quienes se presentaba como disidentes, aunque la mayoría de los fallecidos corresponde a simpatizantes del Frente Sandinista (que no necesariamente militantes del partido), casi todos en ataques turbulentos, como el caso de seis miembros de una familia (entre ellos dos niños), que murieron quemados vivos en su propio domicilio. Según

³ La UCA pertenece a la orden jesuita, mientras que la UPOLI es administrada por la iglesia bautista.

⁴ Durante el golpe de estado fallido, varios de sus promotores exaltaron *La política de la acción no violenta* y *De la dictadura a la democracia*, libros del politólogo derechista estadounidense Gene Sharp, de cuyas ideas se extrae lo que se ha dado en llamar el manual Sharp.

los opositores, la familia fue víctima de un ataque de paramilitares del gobierno, que los quemaron en castigo porque no los dejaron subir al segundo piso de su vivienda para disparar a la multitud desarmada. La prensa internacional reprodujo esta versión, pero no atendió al hecho de que los agraviados son sandinistas, o que los sobrevivientes declararon que sus familiares se negaron a que unos encapuchados utilizaran la planta alta para atacar a la policía, por lo que sufrieron la represalia.

Un ejemplo más, el de un matrimonio, ambos funcionarios públicos, detenidos en un tranque donde los torturaron, al hombre lo penetraron con una botella y lo mataron, mientras que a la mujer la “violaron hasta que se cansaron”, según expresión de algunos de los victimarios. Los hechos fueron denunciados por los vecinos del lugar en que ocurrieron la tortura y el asesinato, pero ni los organismos pro derechos humanos (CIDH, Amnistía Internacional, etcétera), ni los medios de comunicación internacionales investigaron el caso. Tampoco se menciona que en el conflicto fallecieron policías, no siempre en enfrentamientos abiertos, sino cuando estaban en desventaja numérica, o desarmados, como ocurrió en el asesinato de una comisionada regional, que colaboraba en la reparación de un inmueble público dañado, por lo que no tenía su arma. La cifra de fallecidos por la violencia incluye pues a policías y simpatizantes del gobierno, a muchos de los cuales se les asesinó de manera brutal (quemados vivos, linchados, baleados por la espalda). Y como refinamiento de humillación, después de ultimados se “secuestró” su muerte.

También fue nula la atención a la presencia de elementos de las pandillas maras (hondureñas y salvadoreñas). De hecho, el uso de tranques para controlar el tránsito de la ciudadanía, es recurso que las maras emplean en Honduras, El Salvador y Guatemala para dominar barrios, en los que imponen cuotas de paso tanto a los habitantes como a los distribuidores de mercancías. Estos mareros planificaron y ejecutaron actos violentos en connivencia con delincuentes nicaragüenses a quienes se detectó dentro de las protestas callejeras y en los tranques. Con todo, nada se dijo de la asociación de la delincuencia nicaragüense con los mareros y su participación en la destrucción de edificios públicos.⁵ Lo que sí se destacó en portadas de periódicos y en medios electrónicos fue la intervención de la policía nacional, que retiró tranques y detuvo a presuntos delincuentes. Dicha intervención, hay que decirlo, se efectuó sólo hasta mediados de junio, porque durante 55 días la fuerza policial estuvo acantonada en sus centros, aunque muchos de sus miembros sufrieron agresiones y 22 de ellos perdieron la vida en esos 55 días. Es en la segunda

⁵ Muchos de los que huyeron a Costa Rica pertenecen a la delincuencia nicaragüense y las pandillas maras. Algunos de estos individuos han formado grupos criminales que en enero de este 2019 asesinaron a cuatro policías, en una incursión desde territorio costarricense.

quincena de junio que la policía intervino y en ningún momento desplegó todo su poder ofensivo, a diferencia de lo que sostienen la CIDH y diversos medios comunicativos extranjeros. Sin embargo, a contrapelo de la evidencia, la Alianza Cívica, el PLC, el MRS y el empresariado insistieron en la criminalización del gobierno, la petición de presiones diplomáticas y económicas por parte de organismos extranjeros y de gobiernos de América y de Europa, así como en considerarse emisarios del pueblo, que, según ellos, exigía la renuncia de Ortega y su gobierno. Y, entre otros factores, fue la insistencia en esta narrativa la que deslegitimó, a ojos del pueblo nicaragüense, el conflicto social.

De los otros factores, señalo en primer lugar el hecho de que estudiantes, empresarios y religiosos enarbolaron la bandera de los jubilados, mientras estos no participaron, lo que contrasta con lo ocurrido, también en 2018, en Argentina o en España, donde los jubilados fueron los primeros en tomar las calles en defensa de sus pensiones, mermadas por políticas económicas draconianas. En ambos países, sólo después aparecieron los sindicatos, los estudiantes y la sociedad civil, acompañando, que no dirigiendo, la lucha de los jubilados.

En segundo lugar, poco o nada se mencionó que en 2017 el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionó al gobierno de Ortega, indicándole que el seguro social nicaragüense requería una reforma que incluía aumentar la edad de jubilación a 65 años, reducir el monto de cada pensión, establecer 1500 semanas de cotización y derogar las pensiones mínimas. Tales medidas fueron aplaudidas por el empresariado, mientras que el gobierno se mantuvo firme en su negativa a aceptarlas.

En tercer lugar, no se habla de que, desde su regreso al poder, el Frente Sandinista ha incrementado diez veces el salario mínimo, algo que no ocurrió en dieciséis años de gobiernos de derecha; a su vez no se señala que, junto con el incremento salarial, se han vuelto efectivas prestaciones laborales que durante las administraciones derechistas se obviaron o desaparecieron de escena.

Tampoco ha interesado que, a raíz de su regreso al gobierno en 2007, el Frente Sandinista ha mantenido a Nicaragua a salvo de los grupos de delincuencia organizada que asuelan el triángulo del norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), y que la presencia de narcotraficantes en la costa caribe disminuyó de modo notable, por lo que el país se halla entre los más seguros de Latinoamérica, lo que ha merecido el reconocimiento de entidades como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que no son simpatizantes de Daniel Ortega o del sandinismo.

Finalmente, no se toma en cuenta la gradual recuperación de tierras, en las que se han formado cooperativas y terrenos comunales de pueblos indígenas, con lo que se está contrarrestando el latifundismo que incentivaron tres gobiernos consecutivos de derecha. A partir de esta recuperación, el gobierno reactivó la reforma agraria que se truncó en 1990 con el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional Opositora.

Y así como se soslayan los avances sociales conseguidos por el Frente Sandinista, también se pasan por alto las múltiples evidencias que demuestran cómo el conflicto social que se inició el 19 de abril fue una rebelión prefabricada, evidencias que han reunido y verificado no sólo las autoridades del gobierno nicaragüense, sino investigadores independientes, en un ejercicio de análisis en que se han contrastado la versiones de los dos bandos en pugna.⁶ Las primeras evidencias las aportó el catedrático ultraderechista Benjamin Waddell, director académico de la Escuela de Capacitación Internacional, con sede en Nicaragua. Con imprudente arrogancia, Waddell publicó un artículo en el portal *Global americans*, en el que expuso una lista de ONGs, centros de investigación y medios comunicativos apoyados por la National Endowment for Democracy (NED).⁷ En el artículo, Waddell afirma que el conflicto social en Nicaragua no habría sido posible sin el financiamiento de la NED.

El periodista y bloguero estadounidense Max Blumenthal retomó el artículo de Waddell e investigó sobre el apoyo del gobierno de Estados Unidos al conflicto nicaragüense. Blumenthal confirmó las sospechas que de tiempo atrás se estaba organizando la asonada, que habría de difundirse y apoyarse desde Estados Unidos, por medios de comunicación y políticos influyentes. Descubrió también las reuniones de varios miembros de la Alianza Cívica con los senadores republicanos Marco Rubio, Ileana Ros y Ted Cruz, representantes del poderoso lobby ultraderechista de los cubanoamericanos de la Florida, quienes han brindado y brindan apoyo logístico, financiero y comunicacional a los movimientos políticos desfavorables a los gobiernos progresistas de América Latina. Algunos de los beneficiarios del financiamiento de la NED son comunicadores adversos a Ortega y al Frente Sandinista, tal el caso de Miguel Mora, quien desde su noticiero de televisión e internet *100% Noticias* criticó la gestión sandinista desde su regreso al poder en 2007. La mayor parte de las veces, las críticas se basaron en medias verdades y *fake news*. Y durante el

conflicto del 2018, Mora planteó la necesidad de aplicar el manual de golpes blandos ideado por Sharp. Pero estos hechos demostrables no determinaron su encarcelamiento en diciembre de 2018 y el cierre de su canal televisivo. El proceso judicial que enfrenta es por apología del delito, transgresión tipificada por las leyes, no sólo en Nicaragua, sino en casi todos los países del mundo.

Caso parecido es el de Carlos Fernando Chamorro, quien colaboró con el Frente Sandinista en la década de 1980, pero se distanció del partido en el albor de este siglo XXI. Chamorro tiene cinco medios de comunicación distintos, plataformas desde las que descalifica a Ortega y su gobierno. Sin embargo, lo que llevó al cierre de uno de sus espacios fue la clara apología del delito, además del uso opaco de recursos económicos, de origen no especificado, en una ONG a la que está ligado. En enero de este 2019 se trasladó a Costa Rica, donde lo recibió el presidente Carlos Alvarado. En un artículo ampliamente difundido, asegura que se refugió en aquel país porque temía por su vida y la de su familia, pero omite apuntar que salió de Nicaragua legalmente, no clandestino, o que sus otros medios funcionan normalmente.

La convivencia social en Nicaragua se crispó y enturbió con la asonada del 19 de abril de 2018, pero no por los actos de corrupción y represión de un gobierno dictatorial, como difunde la narrativa derechista (y una parte de la izquierda, tristemente). La sociedad nicaragüense se ha polarizado como efecto de la intolerancia de la oligarquía local, que se pliega de forma inmoral y vende patria a los dictados de los poderes fácticos de Estados Unidos, razón por la que aceptó y llevó a cabo una rebelión prefabricada, misma que arrebató alrededor de trescientas vidas humanas, a más de 1000 millones en pérdidas económicas.

Aquellos que condenan en juicio sumario a Daniel Ortega y su gobierno, bien harían en hablar con el pueblo nicaragüense, para constatar cómo la mayor parte de los ciudadanos simpatizan y apoyan la gestión del Frente Sandinista, no por enajenación colectiva o por terror impuesto, sino por la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la implementación de las mismas, lo que ha fortalecido la convicción política del grueso de la población. Y sobre todo deben tomar en cuenta que en Nicaragua sólo hay dos estaciones, secas y lluvias, por lo que no cabe una “primavera nicaragüense”. ☒

Moisés Elías Fuentes (Nicaragua, 1972). Poeta y ensayista. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante de Estudios Latinoamericanos por la misma casa de estudios. Autor del poemario *De tantas vidas posibles* (Centro nicaragüense de escritores, 2007). Seleccionó y prologó las antologías *El lago y la torre. Seis poetas vanguardistas nicaragüenses* y *Andanza y voces de los tres Ernestos. La generación nicaragüense del 40* (UAM, 2011 y 2013). Colabora en la revista *Casa del Tiempo* (UAM) y *Revista de la Universidad* (UNAM). Profesor de literatura en el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX. Se nacionalizó mexicano en 2008.

⁶ Aunque en el trabajo sólo cito a Stella Calloni y Max Blumenthal, incluyo aquí al periodista italiano Giorgio Truchi, al sociólogo argentino Atilio Borón o al analista político cubano Alain Valdés Sierra, entre otros que han revisado la crisis en Nicaragua más allá de la narrativa de los medios comunicativos hegemónicos.

⁷ La Fundación Nacional para la Democracia (NED) se creó en 1983, por iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, con el objetivo formal de promover la democracia, pero con el real de combatir el comunismo y la disidencia a la hegemonía estadounidense en cualquier país del mundo, aunque su campo de acción principal es Latinoamérica.